

Fábio Floriano

Gobierno de Rio Grande do Sul

El papel actual de Brasil en el escenario internacional se explica a partir del giro de la política externa brasileña tras la elección del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva en 2002. Esta, a su vez, se inserta en el contexto de las elecciones de líderes de izquierda socialistas y progresistas en la región a la estela de las crisis de los gobiernos neoliberales de la década de los noventa, que empezó con la elección de Hugo Chávez en Venezuela en 1998 y se extendió por todo el continente, con un breve paréntesis en Chile con la elección de Sebastián Piñera en 2010 hasta la reelección de Bachelet en 2013. El fracaso de las políticas neoliberales de los años noventa permitió que, por primera vez, categorías históricamente alejadas del poder fuesen elevadas a la presidencia de sus países a lo largo de la década que siguió al año 2000. Como consecuencia, accedieron al poder un sindicalista en Brasil, un indígena en Bolivia y un guerrillero tupamaro en Uruguay.

A este fenómeno le siguió un reposicionamiento de los países de la región en el escenario global, haciendo prevalecer por primera vez una agenda mirada desde el Sur hacia el Sur, en detrimento de un alineamiento automático con Europa y Estados Unidos. A partir de allí, se generaron sinergias dentro de la región en política externa reforzando el papel de bloques antes ignorados por las potencias centrales, tales como el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), que reúne a los países de América Latina y el Caribe en foros internacionales o en el G-77, y con la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) en 2008 y la Comunidad de Estados de América Latina y Caribe (CELAC) en 2010.

El creciente rol de Brasil como actor Global

Estos movimientos, liderados en parte por Brasil, fueron fundamentales para que la política externa brasileña elevara al país a la condición de actor global, y culminó con la elección en tiempos más recientes de José Graziano (exministro de lucha contra el Hambre del Gobierno de Lula) como director general de la FAO en 2011, y en la elección de Roberto Azevedo para la dirección general de la OMC a partir de 2013, además

de un comisario en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de un Juez en la Corte Internacional de Justicia.

La agenda internacional que Brasil defiende básicamente es una agenda multilateral, lo cual refuerza la posición brasileña en muchos temas, ya que se trata de una potencia diplomática, económica y de justicia social (verdadera obsesión del expresidente Lula), pero no militar. Es de recordar que, durante el encuentro con el expresidente de Estados Unidos George Bush en el que este le solicitó el apoyo a la guerra en Irak en 2003, Lula respondió que Estados Unidos era libre de entablar su guerra contra Irak, pero que para él la prioridad era la lucha contra el hambre que visibilizó con el programa «Hambre cero». Es posible ilustrar esta afirmación a partir de una serie de ejemplos recientes que han caracterizado la actuación internacional del país, a saber: el mantenimiento de la propuesta de reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cambio de paradigma de la actuación de la FAO, la antes mencionada elección para la Organización Mundial del Comercio (OMC) o la participación activa en la transformación de la antigua e ineficiente Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el Consejo de Derechos Humanos, que fue una propuesta brasileña.

El mantenimiento incisivo y persistente del tema de la reforma del Consejo de Seguridad desde el principio del Gobierno de Lula en la agenda política de las relaciones exteriores brasileñas responde, no a una pretendida sobrerrepresentación del país o de la región a la vista del reiterado interés de Argentina en un virtual y futuro asiento reservado a América del Sur en las instancias internacionales, sino a una ausencia de representatividad general que el referido órgano de las Naciones Unidas tiene en relación con el tablero de poder geopolítico mundial en la actualidad. Este mantiene una conformación que data de la época de su creación en 1945, teniendo como cinco miembros permanentes a las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, en detrimento de otras potencias económicas, políticas y militares que ya existían o que se desarrollaron a partir de entonces. Al no tener representadas a todas las regiones del globo terráqueo de acuerdo a su peso global, el Consejo de Seguridad carece de real efectividad y no refleja un mundo que poco se parece al de 70 años atrás. Un Consejo de Seguridad que no cuenta con la presencia de economías como la japonesa o alemana, o se abstiene de tener entre sus pares a cualquier representación latinoamericana o africana, es un anacronismo sin par. Destáquese asimismo que, según veremos más adelante, este es un debate que aproxima los intereses internacionales de Brasil con los de determinados países de la Unión Europea, como Alemania.

En relación con la agenda social, no hay un ejemplo más claro que el interés del Estado brasileño en garantizar la elección como director general de la FAO al exministro extraordinario de «Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre» del presidente Lula y uno de los padres del programa Hambre Cero y el de Bolsa Familia, José Graziano. Asimismo, hay que destacar que la propia elección de Graziano fue fruto de una política exterior que priorizó las relaciones Sur-Sur y colocó como objetivo central el desarrollo de lazos con los países africanos y latinoamericanos, en oposición a una política automáticamente alineada con los países centrales. Graziano fue elegido por los votos de países africanos y latinoamericanos, contra una candidatura defendida por los

Estados Unidos, y pasó a contar con el apoyo de algunos países de la Unión Europea pasados los 45 minutos del segundo tiempo, utilizando una analogía futbolística. Al asumir su puesto, el exministro rápidamente implementó cambios estructurales, invirtiendo la lógica de emplear el 80% de la fuerza de trabajo de la organización en su sede de Roma y colocando ese porcentual en actividades de campo. Al mismo tiempo, la FAO pasó a fomentar con gran dedicación proyectos de agricultura familiar alrededor del mundo como forma de combatir el hambre y distribuir la renta, además de estimular que los demás gobiernos adopten el ejemplo de Brasil, con programas de adquisición de alimentos para comidas escolares, procedentes de agricultores locales.

Al mismo tiempo, la elección del embajador brasileño Roberto Carvalho de Azevedo en la dirección general de la OMC en mayo de 2013 también se dio en un contexto de reconocimiento a la política externa brasileña por parte de los países del Sur, de los países del GRULAC, de África y otros de menor desarrollo relativo frente a la candidatura del mexicano Herminio Blanco, apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea. Es importante destacar que, menos de tres meses después de asumir su cargo, Azevedo dirigió una reunión histórica del organismo en la Isla indonesia de Bali que logró el desbloqueo de la Ronda de Doha, paralizada desde 2008, y consiguió un acuerdo global de comercio sin precedentes en la historia de la organización.

Para concluir el punto relativo a la agenda internacional del país, continuaré con el ejemplo de la participación de Brasil en la transformación de la antigua e ineficiente Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un Consejo de Derechos Humanos, y los cambios que esto acarrió. Durante el mandato de Kofi Annan como Secretario General de la ONU (1997-2006), la República de Brasil ya manifestó su preocupación por la ausencia de compromiso de los estados con el avance de la agenda de derechos humanos en el planeta, así como con la instrumentalización de esta institución tan relevante como forma de perseguir otros intereses de orden geopolítico, económico o militar. Todo ello conducía a intercambios de acusaciones entre países y, lo que era aun más preocupante, contribuía al debilitamiento de los temas de derechos humanos en su conjunto a causa de la relativización de las denuncias de violaciones ante la clara utilización de estas como instrumento de presión para otros fines. Como una posible solución, propuso un mecanismo donde todos los países fuesen sometidos a una evaluación periódica y fuesen analizados por sus pares acerca de sus déficits en relación con la promoción y protección de los derechos humanos.

Al decidir transformar a la Comisión de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos, la Secretaria General de la ONU resucitó una propuesta originalmente brasileña y la volvió a presentar, esta vez como uno de los componentes cruciales de la estructura de Naciones Unidas, teniendo en cuenta los principios de «no selectividad» y de «no instrumentalización» de los derechos humanos. En la propuesta de creación del nuevo órgano se reconoció que todos los países, en mayor o menor medida, cometen violaciones de derechos humanos o que presentan fallos en cuanto a su implementación, y que es el rol de la comunidad internacional ayudarlos a superar sus dificultades, en vez de simplemente condenarlos o aislarlos debido a esas prácticas. Cuando se creó el Consejo de Derechos Humanos en 2006 este acuerdo llevó al estable-

cimiento del Mecanismo de Revisión periódica Universal (UPR, por sus siglas en inglés). El primer ciclo se inició en 2008 y consiste en un proceso de evaluación al cual todos los miembros del Consejo son sometidos y examinados por la totalidad de los otros, que realizan recomendaciones, las cuales pueden ser aceptadas o no. En el siguiente ciclo, se procederá a la verificación de la implementación de las medidas que se propusieron a cada Estado.

La cuestión ambiental

En referencia al tema del cambio climático y de la protección del medio ambiente Brasil vive una dicotomía. Por un lado, Brasil tiene una de las legislaciones ambientales más avanzadas del mundo al tiempo que es uno de los países que más presiona en el escenario internacional para avanzar en la agenda ambiental a partir del G-77. El país reconocido como uno de los grandes constructores de consenso, habiendo sido un actor decisivo para que la conferencia Río+20 de 2012 tuviese una declaración final que no representase un retroceso y aportase algunos avances, aunque tímidos y por debajo de las expectativas de los movimientos sociales alrededor del mundo, pero más satisfactorios que no obtener ninguna declaración.

Por otra parte, hay que destacar la presión del agro-negocio en pro de la expansión de la frontera agrícola hacia reservas ambientales, especialmente en los biomas cerrados de la selva amazónica. Esta presión es fruto de un modelo exportador de alimentos basado en gigantescas propiedades de monocultivos en detrimento de la realización de una reforma agraria importante. Esta obviamente demandaría una profunda reestructuración logística con el fin de permitir la producción para exportación de un sinnúmero de pequeños propietarios. Estos han seguido creciendo en cantidad, aunque al mismo tiempo se ha conseguido reducir cada año el porcentual de crecimiento del área desforestada.

Vale recordar la existencia, desde el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso en la década de los noventa, de un Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento en paralelo con un Ministerio de Desarrollo Agrario, lo cual denota la ausencia de una política global para abordar el problema por parte del Estado brasileño, toda vez que existen estructuras análogas, una volcada al latifundio y al agro-negocio, y otra al pequeño productor y a los beneficiarios de la reforma agraria. En la práctica, en un ambiente menos favorable que el que ahora se vive en la región, ambas categorías son absolutamente antagónicas.

Otro pasivo ambiental que va generando a Brasil una enorme repercusión internacional es la construcción de hidroeléctricas en la región Norte del país, destacándose la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte, aunque sus predecesoras (Jirau y Santo Antonio) han representado un costo ambiental y humano muy superior. Casi el 85% de la matriz energética brasileña está compuesta por energías renovables, siendo el 77% producido por emprendimientos hidroeléctricos, de acuerdo con el informe «Balance Energético Nacional 2013», realizado por la Empresa de Pesquisa energética, empresa pública constituida por el Ministerio de Minas y energía de la República Federativa del Brasil. Los debates sobre las hidroeléctricas y otras fuentes de energía renovables también se

refieren a denuncias internacionales de organismos de derechos humanos, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la instrumentalización de los derechos humanos para encubrir intereses que impiden el desarrollo soberano de la región, de acuerdo al discurso oficial.

Hay una clara contradicción entre desarrollo de potencial hidroeléctrico, considerado como energía limpia hasta mediados de los años noventa, y el retorno al escenario de las discusiones planteadas por el uso de la energía nuclear. Esta fue considerada por mucho tiempo como el enemigo número uno de los ambientalistas, y ahora surge (al menos mediáticamente) como la panacea a los problemas energéticos latinoamericanos, justamente cuando la región busca alcanzar su autonomía energética a través de energías renovables como la hidroeléctrica.

Esta contradicción no exime a los estados nacionales de que, en su proceso de desarrollo, aseguren que el impacto ambiental se dé en menor grado posible y de garantizar en todo momento los derechos humanos, especialmente de las poblaciones ribereñas e indígenas, las cuales, a través de la Convención 169 de la OIT, tienen asegurada una amplia participación en las decisiones relativas a la construcción de este tipo de empresas en sus tierras.

Los efectos de la crisis en América Latina y su papel en la gobernanza financiera

En América Latina, algunos países se mantuvieron con más capacidad de resistencia a la crisis, justamente por rechazar el recetario neoliberal utilizado durante la década de los noventa y que viene siendo aplicado y seguido con rigor por los países de la Unión Europea, sean gobernados tanto por la derecha o la izquierda. Brasil en particular, ha presentado consecutivamente PIB positivos, con una media de 3,94% en los últimos 10 años.

Sin embargo, aunque el impacto de la crisis fue menor en Brasil, se produjeron protestas, en especial las denominadas jornadas de junio en 2013. Pero hay que marcar la diferencia entre estas y las protestas en otras partes del mundo como Europa. En tanto que en Europa las protestas estaban especialmente volcadas a que los derechos sociales duramente obtenidos fuesen retirados, en Brasil sucedía lo contrario; en las calles se pedía más Estado y más derechos. Querían que los derechos sociales asegurados por ley fuesen llevados a la realidad. Querían seguridad pública de calidad. Querían un acceso real a la sanidad. Esta demanda fue respondida por el Gobierno Federal con el programa «Más Médicos», contratando médicos extranjeros para que se establezcan en regiones notoriamente deficitarias de profesionales de la salud, especialmente en el interior del país o en las periferias de las grandes capitales. Querían además educación de calidad, transporte público accesible, puntual y confortable. O sea, las protestas en las calles de Brasil, en contraposición a las europeas, no eran defensivas: estaban al ataque. A modo de ejemplo, de las numerosas reclamaciones que realizaban los movimientos de junio, que en determinado momento aglutinaron a un amplio espectro (desde la extrema derecha fascista a la izquierda revolucionaria), ninguna de ellas exigía más empleo.

¿Cuál fue el detonante de los movimientos de junio? Según algunos análisis internos, algo con lo cual yo mismo he sido bastante crítico: la ausencia de enfrentamiento de clases durante el Gobierno de Inácio Lula da Silva o el de Dilma Rousseff. Y aquí, antes de criticar, es necesario decir que el Gobierno de Lula conquistó algo importantísimo y sin parangón en la historia al sacar a 28 millones de brasileños de la pobreza y llevar a otros 36 millones a la clase media de acuerdo a los informes del Plan Brasil Sin Miseria, del Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre. También es necesario destacar que se alcanzaron los 64 millones de brasileños en condición de ser consumidores. Son personas que antes no tenían qué comer y que, en la actualidad, no solo realizan tres comidas al día, sino que también pueden comprar neveras, cocinas, automóviles y otros bienes a plazos. Y ahora estos consumidores van a reclamar sus derechos. Afirman protestando en las calles que no aceptan ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Exigen que el Estado ejecute las exitosas y efectivas políticas públicas de redistribución de la renta y movilidad social implementadas por los sucesivos gobiernos del PT, responsables de mejorar la vida de un número de personas equivalentes a la población de Francia, y que también atienda sus demandas en el área de salud, educación, seguridad y transporte.

¿Esto significa que las administraciones del PT fracasaron? De ninguna manera. Me remito a la opinión de Tarso Genro, exministro de Justicia y educación del presidente Lula y actual gobernador del Estado de Río Grande do Sul. Para él, lo que está tras estos 10 años de Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) es justamente el fin de un ciclo, que se agota por haber cumplido su objetivo. De ahí la necesidad de actualizar el programa y el discurso del PT para el próximo periodo, enfocándose en lo que Dilma Rousseff comenzó a hacer: aumento de la calidad de los servicios públicos y una efectiva universalización de los derechos sociales.

La agenda de desarrollo pos-2015

En relación con la agenda de desarrollo pos-2015, es necesario antes que nada destacar un aspecto interno cuyos efectos en el ámbito internacional se hacen sentir profundamente, y que se trata de la gran batalla de la presidenta Dilma Rousseff para el próximo periodo: la transferencia de capital especulativo en capital productivo. Brasil, por varias décadas, sostuvo las más altas tasas de interés del planeta, siendo el paraíso de los rentistas, especuladores y de todos aquellos que vivían del capital financiero. Incluso durante los gobiernos de Lula, cuando hasta la revista británica *Foreign Affairs*¹ adulaba al Gobierno brasileño y a su política externa, llegando a loar al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, como el «mejor canciller del mundo», el país permanecía en la lista de aquellos con mayores intereses reales del mundo.

Al tomar la decisión de realizar la antes mencionada transferencia y, acto seguido, bajar los intereses, la política económica del Gobierno que había sido celebrada internacionalmente como un ejemplo de políticas fiscales responsables, combinadas con crecimiento y distribución de renta en medio de una crisis mundial, pasó a ser blanco de constantes ataques por parte de la misma revista, de buena parte de la prensa que defiende los intereses del sector financiero y hasta del mismo FMI. Este

1. http://www.foreignpolicy.com/posts/2009/10/07/the_world_s_best_foreign_minister

pulso se puede ver diariamente en los periódicos de derecha nacionales, que asumieron un papel de oposición política y pasaron, desde entonces, a criticar inexorablemente al Gobierno, en contraste con coberturas más heterogéneas de la prensa internacional. Infelizmente, hemos asistido a algo que podría ser interpretado como una capitulación parcial del Gobierno, con sucesivos aumentos tímidos en las tasas de interés, lo que llevó a Brasil, en octubre de 2013, de vuelta al tope del *ranking* de los países con tasas más altas de intereses reales.

Como continuación de una agenda dirigida al desarrollo y no a la austeridad es fundamental hablar del abordaje que los países y regiones vienen dando a la crisis mundial; mientras que Europa se dedica masivamente a seguir las recetas neoliberalistas del Fondo Monetario Internacional, América Latina, por haber sido laboratorio de tales experiencias en los años noventa y haber sentido en carne propia los males de las mismas, se dedica a medidas anticíclicas absolutamente opuestas a las europeas. Tenemos en la región la certeza de que el FMI no atiende los intereses de los países en cuestión, sino los de los especuladores y rentistas. La superación de las crisis de los años noventa en la región no se dio a través de la aplicación de la ortodoxia neoliberal, sino por el derrocamiento de los gobiernos de derecha que la defendían y por su reemplazo por gobiernos de izquierda que creían en el papel del Estado como actor económico, ya sea como agente o como incentivador del desarrollo.

En octubre de 2013, dos informes, uno divulgado por el Consejo Europeo y otro por la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), destacaban los efectos devastadores de las políticas de austeridad. La FICR llegó a afirmar que Europa está ante una «inminente crisis humanitaria», ya que los pobres se están haciendo más pobres, hay más gente cuya renta está por debajo de la línea de la pobreza y la desigualdad. De acuerdo a esta entidad, las «consecuencias a largo plazo» de la crisis están aún por llegar, ya que el tema del desempleo en Europa es una «bomba de tiempo». En un cuarto de los 52 países objeto del estudio, el nivel de desempleo juvenil fue clasificado como «catastrófico», variando desde un tercio de la población hasta 60% de los jóvenes de un país. Entre los más viejos, la situación es también problemática. En 2008, había 2,8 millones de desempleados de entre 50 y 64 años en los 28 países de la Unión Europea. En 2012, ese número llegó a los 4,6 millones.

En junio de 2013, al hacer una evaluación de la ayuda a Grecia, el FMI admitió que no imaginaba los impactos negativos que las medidas de austeridad impuestas en aquel país tendrían². En un informe conjunto con otros dos integrantes de la llamada «troika» –el BCE y la Comisión Europea– el FMI admitió que «la confianza del mercado no fue recuperada, el sistema bancario perdió el 30% de sus depósitos y la economía sufrió una recesión mucho más profunda de lo esperado, con un excepcionalmente alto nivel de desempleo. Por contraste, Brasil viene presentando un crecimiento continuo, con previsión de un crecimiento del PIB del orden del 2,5% para el próximo periodo de 2013 y, según el FMI, y viene oscilando entre la quinta y séptima economía del mundo. Sin llegar a ser un PIB chino, el propio director del FMI dijo que, a pesar de la ausencia de reformas, es un crecimiento que a muchos países les gustaría tener el próximo año.

2. <http://www.theguardian.com/business/2013/jun/05/imf-admit-mistakes-greek-crisis-austerity>

Las posibles convergencias con Europa

Hoy, más allá de iniciativas puntuales, como por ejemplo el programa brasileño de Ciencias sin Fronteras, responsable de financiar estudios de grado y posgrado de estudiantes brasileños en universidades europeas, o de la justa lucha germano-brasileña por un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, la agenda brasileña y europea están en polos, si no opuestos, al menos distantes. Como ejemplo, ya se ha mencionado el propio abordaje de la crisis, pero también, la agenda migratoria, el compromiso frente a derechos sociales y la posición frente a conflictos internacionales, sobre los cuales trataremos brevemente.

En relación con la agenda migratoria la posición europea ha sido cada vez más restrictiva, limitando la libre circulación de personas y atendiendo contra los derechos de los inmigrantes. Cada vez más se trata la inmigración como una cuestión policial, decretando el derecho a confinamiento de inmigrantes tenidos como ilegales en «centros de internamiento para extranjeros». Se busca dificultar el acceso a posibles inmigrantes al país, y no son pocos los casos de personas retornadas a sus países de origen, especialmente naciones de América Latina y de África, sin ningún otro motivo que una decisión carente de motivación y dejada a la estimación personal del oficial de frontera. Tal práctica, constantemente denunciada por Brasil en los foros internacionales, contrasta con el abordaje ecuatoriano, por ejemplo, de esta cuestión. Respondiendo a una política de ciudadanía universal, el pequeño estado sudamericano dio muestras de grandeza al abrir sus fronteras. Se espera que Brasil, que está pasando por debates legislativos en vistas a la construcción de una política migratoria compatible con la Constitución Ciudadana de 1988, se adhiera al ejemplo de Ecuador al garantizar a la población inmigrante una legislación que represente un avance frente a la actual, habida cuenta que el llamado «Estatuto del Extranjero» se remonta a los años de la dictadura militar. Aunque difícilmente asegure tantos derechos como la ley ecuatoriana, sí supondrá un distanciamiento de la política cada vez más restrictiva del viejo mundo.

Del mismo modo, los derechos sociales y tratados relacionados en general se van reconociendo cada vez más en Brasil y en América Latina, asegurando y universalizando derechos, pese al escenario externo desfavorable. Se es consciente de que quitar derechos a la población interesa solo a una élite que busca enriquecerse a costa de la privación de conquistas por las cuales generaciones enteras lucharon duramente, tales como la salud, la educación o las garantías laborales. Europa, mientras tanto, parece haber olvidado las lecciones que enseñó al mundo cuando creó los Estados de Bienestar Social y, atendiendo las demandas de esta minoría auto-interesada representada por la Troika, van paulatinamente recortando derechos para atender a los intereses del capital financiero.

Una posible convergencia entre Brasil y Europa es la agenda de Internet. Brasil fue uno de los países más espiado por los Estados Unidos, incluyendo el correo electrónico personal de la propia presidenta. Esconder intereses económicos o geopolíticos debajo de las agendas de seguridad y de derechos humanos se aplica a este tema: por ejemplo fueron espiados el Ministerio de Minas y Energía, y Petrobras. Estos hechos terminaron por generar un contundente pronunciamiento por parte de la

presidenta en la Asamblea General de la ONU. Cabe también mencionar que, a raíz de estos acontecimientos, el ICAAN (Internet Corporation for Assigned Names and Number) y otros actores-gestores online (por efecto de las denuncias de Edward Snowden) han buscado a Dilma Rousseff. La conclusión, compartida también por Angela Merkel, es que los Estados Unidos han ido demasiado lejos. Ante esto, Brasil y Alemania patrocinaron una resolución aprobada en la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas que trata justamente de este tema. Así, la construcción de una nueva arquitectura global de Internet aparece como una agenda de seguridad convergente para el próximo periodo, buscando garantizar los derechos y la privacidad online de los ciudadanos de todo el planeta.

Diálogo sobre seguridad entre América Latina y Europa

Hablar sobre la posición frente a conflictos internacionales, por su parte, remite directamente a la cuestión de seguridad y los diálogos relacionados entre América Latina y Europa. Cuando hablamos de seguridad, es preciso, antes que nada, definir de qué seguridad se está hablando, y para quien. ¿Se trata de seguridad para el capital o para los pueblos? ¿A qué intereses están sirviendo quiénes nos protegen? Las protestas que irrumpieron alrededor del mundo en los últimos dos años dejaron claro que los derechos humanos y la seguridad son dos caras de la misma moneda absolutamente inseparables, y que es imprescindible escoger cuál será la cara de la moneda que va a pesar más.

La posición sudamericana frente a los conflictos internacionales, salvo rara excepción, ha sido la salida diplomática de los conflictos. Y por esta razón hay una constante oposición por parte de la región en relación con las votaciones individualizadas contra países, tenidas como una de las últimas alternativas posibles por parte de la diplomacia. Tal posicionamiento contrasta con la mayor parte de las actuaciones europeas en el último periodo, que se han caracterizado por la demonización de determinados países y por la política de apoyo a intervenciones militares en terceros países.

Como ejemplo, puede verse el tratamiento dado en 2011 a la situación en Libia y en relación con la Primavera Árabe. Allí se observó el distanciamiento entre el discurso y la práctica de las naciones europeas en relación con el Derecho Internacional y a la instrumentalización de los derechos humanos para otros fines posteriores, lo que significó un distanciamiento que se vio agravado con el caso de las escuchas ilegales de la National Security Agency de los Estados Unidos.

Después de una desastrosa actuación al inicio de la Primavera Árabe, cuando Sarkozy colocó a las fuerzas armadas francesas a disposición de Bem Ali, o del apoyo dado a Mubarak en Egipto, la Unión Europea, así como los Estados Unidos, consiguieron finalmente encontrar un fin útil a estas movilizaciones sociales. Participaron por primera vez con representaciones del más alto nivel y peso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de 2011 discurso unísono que servía de coro de los debates venidos de Nueva York: Libia es mala, Libia es una amenaza para la seguridad internacional. Y de manera subliminal, dejó otro mensaje: Libia es igual a Irán.

A pesar de que Libia tenía el mayor índice de desarrollo humano del norte de África y era increíblemente liberal en comparación con las monarquías sauditas, los Emiratos Árabes o Bahrein, nada de eso importaba. Sí, Gadafi era un dictador más. Pero, si hubiese una lista de violadores de derechos humanos durante la represión de los acontecimientos de la Primavera Árabe, él estaría por debajo de los países mencionados y, sin embargo, ninguna mención de intervención fue hecha en relación con estos.

La intervención militar fue aprobada sobre Libia, en gran parte gracias a esta instrumentalización, en la cual entraba también el discurso de «responsabilidad de proteger». Como resultado, Libia se convirtió en un país destrozado. La diplomacia brasileña, preocupada, buscaba soluciones. Vale resaltar un diálogo relatado por un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en relación con el episodio; en una conversación con un embajador de los Estados Unidos, el brasileño señaló: «tenemos que hacer algo en relación con Libia», a lo que el otro respondió: «Pero la cuestión de Libia esta solucionada, el petróleo ha vuelto a fluir».

Las preocupaciones de seguridad latinoamericanas y brasileñas tienen mucho más que ver con la defensa de la región frente a los intereses del imperialismo que con eventuales amenazas terroristas islámicas. Son mucho más claros, para los militares brasileños, los acontecimientos tales como la reactivación de la Cuarta Flota de los Estados Unidos justo en el momento de inicio de la exploración de petróleo, que colocó al país en la posición número 13 en términos de reservas de petróleo, o también el hecho de que América Latina posee las mayores reservas de agua dulce del planeta, sin dejar de mencionar el potencial farmacéutico que representa la selva amazónica, una eterna preocupación de los militares brasileños.

Como conclusión, lo que se intenta hacer hoy en la región es quebrar el paradigma de imperialismo que siempre estuvo presente y desarrollar un nuevo modelo de relaciones internacionales, pero apoyado en principios que compartimos. Y, no nos engañemos, los principios que rigen la actuación exterior de América Latina y la Unión Europea son los mismos. Las diferencias son de método y no de principios, como ocurre con la Agenda pos-2015 de Desarrollo. Si somos capaces de cooperar siguiendo un nuevo modelo de relaciones, con las mismas bases con las que, en el ámbito regional, conseguimos afianzar a UNASUR y CELAC, tendremos un futuro brillante por delante.